

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN**



**SALA LABORAL**  
**Acta N°050**

Medellín, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelven los recursos de apelación interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ SÁNCHEZ** contra **PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A., COLPENSIONES** y el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

**ANTECEDENTES**

**Pretensiones**

El demandante solicita que se declare la ineficacia de la afiliación al RAIS; y, en consecuencia, se declare que se mantuvo afiliado sin solución de continuidad al RPM administrado en la actualidad por **Colpensiones**.

Así mismo, se **condene** a **Porvenir S.A. y Protección S.A.** a trasladar a **Colpensiones** los dineros recibidos con motivo de su afiliación y hasta última administradora a reconocer y pagar la pensión de vejez y los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Finalmente, solicitó que se condene a **Porvenir S.A.** a reconocer a título de perjuicios la pensión de vejez desde el 10 de octubre de 2017 y hasta el día que

se realice el traslado efectivo al RPM, en subsidio, se imponga similar condena a **Protección S.A.**

### **Hechos**

Como fundamento de sus pretensiones indica que nació el **10 de octubre de 1955** y fue afiliado al **ISS** hoy **Colpensiones** el 1 de agosto de 1989, administradora a la que cotizó un total de 597,86 semanas.

El día **30 de marzo de 2001**, suscribió formulario de vinculación al RAIS a través de la **AFP Horizonte S.A.**, sin que por parte del asesor de esta entidad se le entregara información acerca de las características de ese régimen pensional y sus principales diferencias con el RPM.

El **30 de mayo de 2012**, se trasladó a **Protección S.A.**, sin que en esta nueva oportunidad se le informara sobre las ventajas y desventajas comparativas de los regímenes pensionales existentes.

En toda su vida laboral cuenta con un total de 1434 semanas cotizadas.

### **Respuesta Colpensiones**

**Colpensiones** a través de apoderada indicó que es cierto que el demandante fue su afiliado y se trasladó al RAIS sin que le consten los pormenores de esta decisión.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación, petición de lo no debido, inexistencia de intereses moratorios, prescripción, imposibilidad de condena en costas, buena fe y descuento del retroactivo de salud.

### **Respuesta Protección S.A.**

Esta AFP a través de apoderada indicó que es cierta la fecha de nacimiento del actor y su afiliación a esa entidad, precisando que la decisión de traslado fue libre y voluntaria y se efectuó luego de recibir una debida y completa asesoría.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, falta de juramento estimatorio, aprovechamiento indebido de recursos públicos, prescripción, reconocimiento de restituciones mutuas e inexistencia de obligación de devolver seguro previsional.

### **Respuesta Ministerio de Hacienda y Crédito Público**

Esta entidad a través de apoderado manifestó que no le constan los hechos, e informó que lo que toca con ese Ministerio expidió y pago bono pensional tipo a modalidad 2 a través de la **Resolución 19988 del 20 de junio de 2019**, por lo que solicitó que en el evento en que se declare la ineficacia del traslado, se ordene a **Protección S.A.** la devolución del valor recibido debidamente indexado para proceder con la anulación.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: ausencia de responsabilidad de la Nación, buena fe y prescripción.

### **Respuesta Porvenir S.A.**

**Porvenir S.A.** a través de apoderado manifestó que es cierto que el actor fue su afiliado y que su vinculación se dio luego de recibir información clara, precisa y completa. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: prescripción, buena fe e inexistencia de la obligación.

### **Sentencia de primera instancia**

El Juez Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **25 de enero de 2023**, declaró la ineficacia del traslado al RAIS, **condenando a Porvenir S.A. y Protección S.A.**, que, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, trasladen a **Colpensiones** el valor de la cuenta de ahorro individual del demandante con sus respectivos rendimientos, las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados, también con la inclusión del bono pensional.

De otro lado ordenó a las AFP del RAIS, que, al momento de cumplir la orden impartida, deberán remitir a **Colpensiones** la relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Ordenó al **Ministerio de Hacienda y Crédito Público** que proceda a anular el bono pensional tipo A modalidad 2 redimido y emitido en favor del demandante, y que realice las operaciones interadministrativas de ajuste.

**Condenó a Colpensiones** a recibir los valores trasladados por las administradoras del RAIS convirtiéndolos en semanas cotizadas y le ordenó

reconocer la pensión de vejez al demandante bajo los lineamientos de la Ley 797 de 2003 a partir de la fecha de la última cotización, autorizándola a descontar del eventual retroactivo causado las cotizaciones con destino al sistema de seguridad social en salud.

Finalmente, absolvió a las administradoras del RAIS de la pretensión encaminada al reconocimiento de perjuicios.

Esta decisión no la compartieron los apoderados de la parte demandada, motivo por el cual la impugnaron en los siguientes términos:

#### **Recurso Ministerio de Hacienda y Crédito Público**

El apoderado del Ministerio solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia, por cuanto no se ordenó la restitución del valor pagado a la administradora del RAIS y en ese sentido la orden a anulación resulta inane.

Por otra parte, solicita que se revise cual es el bono que reconoció el Ministerio de Hacienda, por cuanto este aspecto al que el a-quo resta importancia, es fundamental de cara al cálculo de los valores a pagar.

#### **Recurso Colpensiones**

La apoderada de esta administradora solicita que no se imponga condena a su cargo, toda vez que es un tercero absoluto, que no debe ser responsabilizado por los hechos realizados por otras administradoras.

De otro lado, no se puede desconocer que en este caso el demandante ya cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de vejez debe ser asumida por la administradora del RAIS a la que se encuentra afiliado.

#### **Recurso Porvenir S.A.**

Por su parte del apoderado de esta AFP solicitó que no se impusiera la indexación de los conceptos que integran los gastos de administración, toda vez que el valor de esta actualización se supera ampliamente con los rendimientos generados durante la vigencia de la afiliación y que están siendo trasladados a **Colpensiones**.

#### **Recurso Protección S.A.**

Finalmente, el apoderado de esta administradora solicitó que se revoque la decisión de primera instancia en lo referente a las condenas impuestas a esa

administradora, dado que, la orden de trasladar el valor del bono pensional a **Colpensiones** y la anulación del mismo por parte del **Ministerio de Hacienda y Crédito Público** son excluyentes.

En lo que tiene que ver con el traslado de los gastos de administración y lo cobrado por seguros previsionales solicita que no se imponga esta condena, por cuanto esa entidad no fue la causante de la ineficacia declarada, sin que afectara algún derecho del demandante, puesto que para el año 2012 cuando el actor se trasladó teniendo en cuenta su edad no le era posible retornar al RPM.

De otro lado, se debe resaltar el cumplimiento del deber de gestión de esa administradora que obtuvo rendimientos de la cuenta individual administrada.

Por último, en lo que refiere a los seguros previsionales se debe tener en cuenta que los dineros ya fueron pagados a una administradora que cubrió las contingencias de invalidez y muerte mientras el demandante estuvo afiliado a esa administradora, además de que sobre estos dineros operó la prescripción por ser valores que no financian la pensión.

### **Alegatos de conclusión**

Corrido el término de traslado, la apoderada de **Colpensiones** presentó alegaciones en la que solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, sosteniendo que la carga de demostrar las condiciones en que se dio la afiliación al AFP del RAIS recae en el demandante.

De otro lado, destacó que de permitirse el traslado del demandante se estaría efectuando la sostenibilidad económica del sistema, toda vez que se trata de una persona cuyo paso entre regímenes se encuentra prohibida por faltarle menos de 10 años para cumplir la edad pensional.

Finalmente, solicita que de confirmarse la decisión de primera instancia se ordene a las AFP del RAIS trasladar a Colpensiones todos los valores recibidos sin lugar a ningún descuento.

Por su parte, el apoderado de **Porvenir S.A.** solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, toda vez que, el actor no demostró la existencia de algún vicio que invalidara el consentimiento entregado al momento de suscribir el formulario de afiliación.

Del mismo modo resalta que existen en el proceso elementos que debieron ser objeto de valoración por parte del juez a-quo, como la garantía de los derechos de retracto y libre escogencia, además de que cumplió con la carga de probar

bajo el estándar que le era exigible para el momento de la vinculación del demandante, sin que posteriores criterios le puedan ser oponibles.

El apoderado del actor solicitó que se confirme la decisión de primera instancia, toda vez que sigue le precedente jurisprudencial que en materia de traslado entre regímenes pensionales y en cuanto al deber de información ha trazado la Sala Laboral del Corte Suprema de Justicia.

## CONSIDERACIONES

### Problema jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta segunda instancia conforme con los recursos de apelación interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta, serán: (i) determinar si el acto jurídico que generó el traslado de régimen del demandante resulta o no eficaz, (ii) establecer cuáles son las consecuencias jurídicas de la declaratoria de ineficacia, (iii) determinar a quién debe ser devuelto el valor pagado por concepto de bono pensional, (iv) revisar si operó la prescripción y (v) establecer si el demandante cumple con los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

### Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

1. El señor **Francisco Javier Ramírez Sánchez** nació **10 de octubre de 1955** (03/pág.3).
2. El actor se afilió al **ISS** hoy **Colpensiones** desde el 1 de agosto de 1989 (03/pág.10).
3. El actor suscribió formulario de afiliación al RAIS administrado por **Horizonte S.A.** hoy **Porvenir S.A.** el día **30 de marzo de 2001** (03/pág.18), afiliación vigente entre el 1 de mayo de 2001 y el 30 de junio de 2012 (18/pág.61).
4. El día **30 de mayo de 2012**, el actor diligenció formulario de traslado a **Protección S.A.** (03/págs.22-23), afiliación vigente a partir del 1 de julio de 2021 (18/pág.61).

5. Según historia laboral generada el 17 de diciembre de 2018, el actor contaba con 1434,29 semanas en toda su vida laboral (03/págs.26-34).
6. Mediante la **Resolución 19988 del 20 de junio de 2019**, la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió y ordenó el pago de bono pensional del afiliado **Francisco Javier Ramírez Sánchez** (25/págs.7-15).

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

### **El precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional**

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha elaborado un nutrido precedente en materia de la obligación de información de los fondos de pensiones, siendo sus sentencias fundantes la 31314 y 31989 del 9 de septiembre de 2008, a las que ha seguido una copiosa producción al resolver recursos de casación en las sentencias SL1688 de 2019, SL4360 de 2019, SL4426 de 2019, SL2611 de 2020, SL2877 de 2020, SL-1217 de 2021 y SL-755-2022.

En las providencias citadas el Alto Tribunal fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo a las administradoras de pensiones, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos: (i) desde la fundación de las AFP, segundo momento, (ii) desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 y (iii) a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

En el caso sometido a estudio, el traslado al RAIS se efectuó el día **30 de marzo de 2001** (03/pág.18), lo que se corresponde con el primer momento, ciclo para el cual la jurisprudencia interpretando artículo 97 del Decreto 663 de 1993 ha exigido la demostración por parte de las administradoras de pensiones del cumplimiento del deber entregar una información necesaria y transparente, conceptos que se explican en la sentencia SL-1452-2019 de la siguiente forma:

**Información necesaria:** consistente en la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo

que implica un comparativo entre las vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado.

**Transparencia:** La AFP a través de su promotor debe comunicar a su potencial afiliado en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios.

El anterior deber trae en lo procesal una carga que recae en la administradora de pensiones, y es demostrar que suministró al posible afiliado una información calificada, en la que se expliquen los beneficios y desventajas del cambio de régimen, para solo a partir de este conocimiento concluir que se garantizó su derecho al ejercicio de una libre selección de régimen pensional.

Sobre la **carga de la prueba** es importante la remisión a la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada -la de que no recibió información- y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, aspecto en el que por demás está en una mejor posición de ilustrar por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado.

En lo que respecta al caso de autos, **Porvenir S.A.** al dar respuesta manifestó que al momento del traslado al RAIS del actor le suministró una información clara, precisa y completa, sin embargo, más allá de esta afirmación no se trajo al proceso prueba de que se entregó al demandante una información necesaria y transparente para la fecha de la suscripción del formulario de afiliación<sup>1</sup>, sin que por lo demás la suscripción voluntaria del formulario de afiliación lo exonere de esta carga, pues como lo ha indicado reiteradamente el precedente

---

<sup>1</sup> En lo referente a la aplicación de la carga de la prueba se indicó en sentencia SL-081 de 2021, lo siguiente: “Por tal razón, si la parte actora alude a la ausencia de tal información, como ocurre en este caso, no es de su cargo demostrar tal omisión, pues corresponde a un hecho negativo. Por el contrario, es deber de la AFP traer a juicio los elementos de prueba que permitan establecer que, al momento de la afiliación, brindó las explicaciones suficientes y veraces sobre las consecuencias, beneficios y desventajas del traslado de régimen pensional. Así, si a la administradora se le adjudica el incumplimiento de su deber profesional y de no actuar con diligencia, entonces incumbe a ésta acreditar que sí atendió tales obligaciones. Además, es la entidad quien se encuentra en mejor posición probatoria para allegar los elementos de prueba requeridos para esclarecer hechos como los que aquí se discuten.”



de la Corte Suprema de Justicia la suscripción de este documento apenas implica que hubo un consentimiento libre de vicios<sup>2</sup> pero no informado.

De otro lado, se debe resaltar que el ejercicio del derecho de libre selección entre administradoras del RAIS no convalida el acto ineficaz, puesto que, ha sido insistente la jurisprudencia en indicar que la carencia de eficacia no es susceptible de saneamiento, en tal sentido se dijo en la sentencia SL-2059-2022, lo siguiente:

Por otra parte, respecto a los actos de relacionamiento que plantea la censura, se advierte que esta Sala en sentencias CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL2877-2020, CSJ SL1942-2021, CSJ SL1949-2021 y CSJ SL5686-2021 precisó que una vez acreditada la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, el acto no se convalida por los tránsitos que los afiliados hagan entre administradoras privadas de este esquema.

Finalmente, sobre las obligaciones que recaen en las administradoras de pensiones es bastante ilustrativa la sentencia SL-782 de 2021, donde la Corte Suprema de Justicia indicó que según su línea jurisprudencial se debe declarar la ineficacia cuando quiera que:

...i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

A partir de lo anterior, encuentra la Sala que al no demostrarse en el proceso que al momento de selección el RAIS el afiliado recibió una información necesaria y transparente, la consecuencia es que la afiliación efectuada devenga ineficaz de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que a **confirmar** la decisión consultada en este aspecto.

#### **De la obligación a cargo de Protección S.A.**

---

<sup>2</sup>Sentencias SL-4426-2019, SL-782 de 2021 y SL-1743 de 2021

El apoderado de **Protección S.A.** solicita que no se impongan los efectos económicos de la declaratoria de ineficacia a esa administradora, toda vez que, no fue la generadora del acto declarado ineficaz, además cuando el afiliado se vinculó a la misma se encontraba inmerso en la prohibición legal de traslado de régimen pensional, por lo que ninguna omisión en cuanto al deber de información le es imputable.

Con el fin de dar respuesta a este motivo de informalidad es importante recordar que la ineficacia, genera efectos respecto de todas las administradoras de pensiones vinculadas, más allá de si participaron o no en el acto declarado ineficaz, esto por cuanto no pueden obtener un beneficio de una actuación que no cumplió con los requisitos de ley para su surgimiento. En palabras de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

Conforme con lo explicado fue acertada la decisión del juez de primera instancia cuando impuso obligaciones a **Protección S.A.** derivadas de la declaratoria de ineficacia, debiéndose revisar el aparte siguiente cuales son los conceptos que está obligada a devolver esta AFP.

### **De los efectos de la ineficacia**

El Juez de primera instancia, condenó a las administradoras del RAIS a las que estuvo afiliado el demandante a trasladar a **Colpensiones** el valor de la cuenta de ahorro individual con sus respectivos rendimientos, las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados.

Esta condena es recurrida por los apoderados de las administradoras privadas argumentando que: (i) esas entidades cumplieron con sus obligaciones como administradora de los dineros de su afiliado y obtuvieron unos rendimientos, (ii) a través del pago de los seguros previsionales de invalidez y muerte, estas contingencias se mantuvieron protegidas, por lo que tiene derecho a conservar

lo descontado por gastos de administración y (iii) de ordenarse la devolución esta no puede ser indexada pues los rendimientos contenidos en la cuenta de ahorro individual superan con creces el valor de la actualización monetaria.

Por su parte, la apoderada de **Colpensiones** señala que no se debió ordenar el traslado de recursos a esa administradora, puesto que como tercero ajeno al acto declarado ineficaz no debe ser perjudicado con sus efectos, por lo que cualquier responsabilidad debe recaer en las administradoras del RAIS a las que estuvo afiliado el demandante.

Con el fin de dar respuesta a los recursos y de paso resolver el grado jurisdiccional de consulta, es relevante recordar que en este caso se está aplicando la ineficacia, como respuesta jurídica del ordenamiento jurídico por la transgresión de un deber legal y ello implica, que el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto, no produzca ningún efecto.

En ese orden, es importante hacer énfasis en lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL-4360 de 2019, en la que indicó que: la sanción impuesta en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra una **ineficacia en sentido estricto**, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado.

Siguiendo esta enseñanza la jurisprudencia ha indicado que debe darse aplicación al artículo 1746 del Código Civil que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades, con la necesaria precisión de que al tratarse de un tema pensional, el juez del trabajo debe aplicar soluciones que compensen de manera satisfactoria el perjuicio que fue ocasionado a un afiliado por el cambio injusto de régimen pensional y ello implica que las AFP que se beneficiaron de ello trasladen a **Colpensiones**, todos los conceptos que recibieron.

En virtud de lo expuesto para la Sala es claro que durante el periodo en que el actor estuvo vinculado al RAIS, se privó a **Colpensiones** del cobro de los gastos de administración en su favor, y en ese orden el restablecimiento de las cosas a su estado inicial no puede perjudicar al fondo de naturaleza pública, porque precisamente con fundamento en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, esta entidad tiene derecho a recibir 3 puntos porcentuales del aporte por gastos de administración, concepto que no fue recibido como consecuencia del acto declarado ineficaz.

En lo que toca con el pago de seguros previsionales, concepto respecto del cual se sostiene no puede ser devuelto por cuanto la AFP los pagó a un tercero y

mientras se mantuvo vigente la vinculación este protegió los riesgos de invalidez y muerte, se debe indicar que dichos pagos obedecieron a una vinculación declarada ineficaz y en tal sentido hay una disminución en el valor del porcentaje de debió corresponder a **Colpensiones**, desmejora que debe asumir el fondo de pensiones generador de la ineficacia, y es por ello que la jurisprudencia ha indicado que deben ser reconocidos con cargo al patrimonio de los fondos de pensiones como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia entre otras en las sentencias SL-755-2022, SL-756-2022 y 779-2022.

Por último, en lo referente a la solicitud de que no se ordene la indexación de las sumas trasladadas por concepto de gastos de administración, es relevante recordar que tal orden se justifica en la necesidad de que los recursos devueltos sean actualizados sin que pierdan su capacidad adquisitiva por cuanto tienen como objeto la financiación de un prestación pensional en el RPM (Sentencia SL-4297-2022).

Así las cosas, quedan resueltos los recursos de apelación presentados por los recurrentes en lo que refiere a los efectos de la ineficacia, indicando que se desestiman las solicitudes de los mismos, sin embargo, siendo este un aspecto conocido en el grado de consulta es necesario dejar algunos aspectos claros en lo referente a los conceptos que deben ser devueltos por las AFP del RAIS cuando se declara la ineficacia y en ese sentido, esta Sala a partir del precedente jurisprudencial ha identificado los siguientes:

1. **Capital ahorrado:** Este concepto constituye el sustento financiero del pago de la prestación y conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 debe ser trasladado cuando exista movilidad del RAIS al RPM<sup>3</sup>.
2. **Rendimientos:** En igual sentido que el concepto anterior, soportan el pago de la pensión y se trasladan conforme a lo enseñado por el canon 113 ídem, destacando con respecto a estos como lo enseñara la Corte desde la sentencia 31989 de 2008, que su devolución se sustenta en que el mayor valor de la cosa aprovecha al vendedor cuando la restitución se debe al incumplimiento del comprador<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL-2877-2020, CSJ SL-1442-2021, CSJ SL-1440-2021 y SL-782-2021.

<sup>4</sup>Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL-2877-2020, CSJ SL-1442-2021, CSJ SL-1440-2021 y SL-782-2021.

3. Los **gastos de administración**<sup>5</sup>, concepto consagra en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y cuyo valor corresponde a 3 puntos de la cotización obrero patronal efectuada, la cual se destina al pago de seguros previsionales, primas de seguros del Fogafín y la comisión correspondiente a la AFP por su gestión.

En lo referente al traslado de estos conceptos por parte de las administradoras del RAIS a **Colpensiones**, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha encontrado 2 razones fundamentales para soportar esta orden: (i) la declaración de ineficacia implica que las administradoras del RAIS nunca debieron recibir estos beneficios<sup>6</sup>, (ii) la devolución debe ser plena y con efectos retroactivos, porque estos recursos serán utilizados para la financiación de una pensión, aspecto que busca mantener el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones<sup>7</sup>.

4. **Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** el pago de estos aportes propio del RAIS y consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 no encuentra un equivalente en el RPM, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016<sup>8</sup>.

A partir de lo explicado, encuentra la Sala que le asistió razón al juez de primera instancia en lo referente a las condenas que fueron impuestas a las AFP privadas demandadas, sin embargo, es necesario **adicionar** la orden para indicar que el concepto de gastos de administración deberá incluir lo pagado por primas de reaseguros del Fogafín en caso de que se haya descontado y realizar una precisión en orden a que la orden de trasladar el capital ahorrado y sus rendimientos recae en **Protección S.A.**, que es la última administradora a la que estuvo afiliado el actor.

En ese orden con el objetivo de que sean claras las órdenes impuestas a las administradoras demandadas el numeral segundo de la decisión de primera instancia quedará del siguiente tenor:

---

<sup>5</sup> Se deben asumir por el fondo de pensiones con cargo en su propio patrimonio y de forma indexada. En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL 782-2021, CSJ SL 1187-2021 y CSJ SL 1197-2021.

<sup>6</sup> Sentencia SL-4360-2019.

<sup>7</sup> Sentencia SL-2877-2020.

<sup>8</sup> En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL 2877-2020, CSJ SL-936-2021, CSJ SL-938-2021, CSJ SL-1410-2021CSJ y SL1442-2021.

**Condenar a Protección S.A.**, que, en el término un mes contado a partir de la ejecutoria de la sentencia traslade a **Colpensiones** los siguientes conceptos: (i) El capital ahorrado en la cuenta individual del señor **Francisco Javier Ramírez Sánchez**, (ii) los rendimientos generados, (iii) los gastos de administración cobrados, sin lugar a descontar valores por concepto de prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, dineros que deberán ser indexados al momento de su traslado y asumidos con cargo a su propio patrimonio; y (iv) el aporte correspondiente al fondo de la garantía de pensión mínima.

**Condenar a Porvenir S.A.**, que, en el término un mes contado a partir de la ejecutoria de la sentencia traslade a **Colpensiones** los siguientes conceptos: (i) los gastos de administración cobrados, sin lugar a descontar valores por concepto de prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, dineros que deberán ser indexados al momento de su traslado y asumidos con cargo a su propio patrimonio; y (ii) el aporte correspondiente al fondo de la garantía de pensión mínima y (iii) de contar con capital ahorrado en la cuenta individual del señor **Francisco Javier Ramírez Sánchez**, proceda a trasladarlo a **Colpensiones** junto con los rendimientos generados.

**Ordenar a Protección S.A. y Porvenir S.A.**, que, al momento de cumplir con la orden de traslado, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

#### **De la devolución del valor del bono pensional a Colpensiones**

Se recurrió por parte de los apoderados del **Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Protección S.A.** la orden consistente en el traslado del valor del bono pensional a **Colpensiones**, lo anterior por considerar que la financiación en el RPM opera bajo formas diferentes por lo que lo procedente es ordenar la devolución de los valores a la entidad que las pago para que esta una vez reciba la misma pueda proceder con la anulación del bono.

Para resolver este punto es necesario recordar que de conformidad lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993 los bonos pensionales constituyen un aporte para conformar el capital que requieren los afiliados del Sistema General de Pensiones para financiar la pensión.

Los bonos tienen varias clasificaciones; importando para el caso que se resuelve el tipo A, que corresponden al afiliado que se traslada del régimen de prima media al régimen de ahorro individual.

Este mecanismo de financiación de la pensión antes de su pago debe surtir varias etapas entre las que se encuentran la emisión, expedición, redención y pago, en el caso estudiado, el bono pensional se redimió el **10 de octubre de 2017**, cuando el actor cumplió 62 años de edad, y fue pagado por la **OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a Protección S.A.** mediante la **Resolución 19988 del 20 de junio de 2019**, por lo que la declaratoria de ineficacia respecto de este mecanismo de financiación, implica que el dinero recibido sea reintegrado de forma indexada a su pagador, para que este proceda con su anulación.

Siguiendo esta lógica resulta evidente que erró el juez de primera instancia al disponer que el valor recibido por **Protección S.A.** fuera trasladado a **Colpensiones**, puesto que lo procedente es su restitución indexada a la **Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público**, para que esta entidad proceda con su anulación, por lo que en este aspecto se **revocará** el fallo apelado.

### **De la excepción de prescripción**

En lo que tiene que ver con la prescripción, encuentra la Sala que esta excepción no está llamada a prosperar, puesto que, la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos. En este sentido se remite a la lectura de las sentencias SL-1688 de 2019, SL- 3202 de 2021 y SL 3199 de 2021.

Por último, el apoderado de **Protección S.A.** indica en su recurso, que, los conceptos comprendidos dentro de los gastos de administración se afectan por el paso del tiempo y en ese sentido no es posible ordenar su traslado, pues han transcurrido más de 3 años desde su pago por parte del afiliado.

Con respecto a esta manifestación debe recordarse que conforme lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al tratarse de derechos derivados de la declaratoria ineficacia y formar parte del derecho irrenunciable a la seguridad social, tienen el carácter de imprescriptibles. En este aspecto puede consultarse la sentencia SL-608-2022.

### **Del cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez**

En este aspecto que se revisa en virtud del grado jurisdiccional de consulta, se debe indicar que el señor **Francisco Javier Ramírez Sánchez** nació el **10 de octubre de 1955** (03/pág.3), por lo que cumplió 62 años de edad el mismo día y mes del año 2017 fecha para la cual contaba con más de 1300 semanas de cotización<sup>9</sup>, por lo que resulta evidente que cumple con los requisitos para acceder a la pensión de vejez conforme con el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y en ese sentido se **confirmará** la decisión de primera instancia.

### **Costas**

Costas en esta instancia a cargo de **Porvenir S.A.** y **Colpensiones** por haber sido resueltos de manera desfavorable los recursos interpuestos. No se impondrán a **Protección S.A.** y el **Ministerio de Hacienda y Crédito Público** por haber prosperado sus motivos de inconformidad. Las agencias totales en favor del demandante y a cargo de **Porvenir S.A.** y **Colpensiones** se fijan en la suma de **\$1'160.000**, correspondiendo a cada una de las condenadas el pago del 50%.

### **Decisión**

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, el día **25 de enero de 2023**, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ SÁNCHEZ** contra **PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A., COLPENSIONES** y el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, REVOCÁNDOLA** y **ADICIONÁNDOLA** en los términos descritos en la parte motiva y en tal sentido el numeral segundo será del siguiente tenor:

---

<sup>9</sup> En particular 1350 semanas de cotización, conforme se desprende de la historia laboral expedida por Protección S.A. el día 17 de diciembre de 2018 (03/págs.26-34).



**CONDENAR** a **PROTECCIÓN S.A.**, que, en el término un mes contado a partir de la ejecutoria de la sentencia traslade a **COLPENSIONES** los siguientes conceptos: (i) El capital ahorrado en la cuenta individual del señor **FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ SÁNCHEZ**, (ii) los rendimientos generados, (iii) los gastos de administración cobrados, sin lugar a descontar valores por concepto de prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, dineros que deberán ser indexados al momento de su traslado y asumidos con cargo a su propio patrimonio; y (iv) el aporte correspondiente al fondo de la garantía de pensión mínima.

Además, **PROTECCIÓN S.A.**, deberá proceder con la inmediata devolución del valor recibido por concepto de pago de bono pensional a nombre del señor **FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ SÁNCHEZ** debidamente indexado a **OBP del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, para que está a su vez una vez recibido el mismo proceda con su anulación.

**CONDENAR** a **PORVENIR S.A.**, que, en el término un mes contado a partir de la ejecutoria de la sentencia traslade a **COLPENSIONES** los siguientes conceptos: (i) los gastos de administración cobrados, sin lugar a descontar valores por concepto de prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, dineros que deberán ser indexados al momento de su traslado y asumidos con cargo a su propio patrimonio; y (ii) el aporte correspondiente al fondo de la garantía de pensión mínima y (iii) de contar con capital ahorrado en la cuenta individual del señor **FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ SÁNCHEZ**, proceda a trasladarlo a **COLPENSIONES** junto con los rendimientos generados.

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de **PORVENIR S.A.** y **COLPENSIONES**. Las agencias en favor del demandante se fijan en la suma de **\$1'160.000**, correspondiendo a cada una de las condenadas el pago del 50%.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

**LOS MAGISTRADOS**

Radicado 05001-31-05-023-2019-00685-01  
Radicado Interno: P0392323  
Asunto: Confirma, revoca y adiciona sentencia



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**

Radicado 05001-31-05-023-2019-00685-01  
Radicado Interno: P0392323  
Asunto: Confirma, revoca y adiciona sentencia



**SECRETARÍA SALA LABORAL**

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Proceso</b>            | Ordinario  |
| <b>Demandante</b>         | Francisco Javier Ramírez Sánchez   |
| <b>Demandado (s)</b>      | Porvenir S.A., Protección S.A., Colpensiones y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| <b>Radicado</b>           | 05001-31-05-023-2019-00685-01  |
| <b>Decisión</b>           | Confirma, revoca y adiciona sentencia  |
| <b>Magistrado ponente</b> | Carmen Helena Castaño Cardona  |

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado el 31 de marzo de 2023 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Se desfija el 31 de marzo de 2023 a las 5:00pm

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
**SECRETARIO**